

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN**

**CENTRO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO.
INC.**

Peticionaria

v.

**MANUEL CIDRE MIRANDA, en su capacidad
oficial como Secretario del DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO;
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO**

Peticionadas

Civil Núm.:

Sala:

Sobre: *Mandamus*;
Derecho
constitucional de
acceso a la
información pública

PETICIÓN DE MANDAMUS

AL TRIBUNAL:

COMPARECE la parte peticionaria, el **Centro de Periodismo Investigativo, Inc.**, por conducto de la representación legal que suscribe, y **EXPONE, ALEGA** y **SOLICITA:**

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

1.1. La Sala Superior de San Juan del Tribunal de Primera Instancia es la sala con jurisdicción y competencia para entender en el caso de epígrafe en virtud de los Artículos 5.001, 5.003 y 5.005 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 LPRA §§ 25a, 25c, 25e, los Artículos 649 al 661 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA §§ 3421-3433, y las Reglas 3.3 y 54 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, RR. 3.3, 54, toda vez que los hechos objeto de la presente petición ocurrieron en la jurisdicción de San Juan, Puerto Rico.¹

II. LAS PARTES

2.1 La peticionaria, **CENTRO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO, INC.** (en adelante, CPI), es una corporación sin fines de lucro debidamente organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Su Directora Ejecutiva es la

¹ Aunque la Ley de transparencia y procedimiento expedito para el acceso a la información pública, Ley Núm. 141-2019, 3 LPRA §§ 9911-9923, crea un recurso especial para casos de acceso a la información, el artículo 12 de la medida dispone que “[l]a enumeración de derechos que antecede no se entenderá de forma restrictiva, ni supone la exclusión de otros derechos y procedimientos pertenecientes a las personas solicitantes de información pública y no mencionados específicamente como lo es el recurso de *mandamus* tradicional”. 3 LPRA § 9922 (énfasis suplido).

periodista Carla Minet Santos Santiago. Su dirección es: PO Box 6834, San Juan, Puerto Rico 00914-6834. Su teléfono es el (787) 751-1912, ext. 3022.

2.2. El CPI se dedica, entre otras cosas, a la realización de investigaciones periodísticas y a la publicación de reportajes producto de tales investigaciones. Su página web es: <http://periodismoinvestigativo.com/> (última visita el 28 de octubre de 2024).

2.3. El promovido, **MANUEL CIDRE MIRANDA**, es el Secretario del **DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO** (en adelante, DDEC). El DDEC existe en virtud de la Regla 2 del Plan de Reorganización del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de 1994. 3 LPRA Ap. X, § II. Su dirección física y postal es 355 Avenida Franklin D. Roosevelt, San Juan, PR 00918. Su teléfono es el (787) 765-2900.

2.4. El promovido, **ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO (en adelante, ELA)**, es el ente jurídico gubernamental a nivel central, creado por la Constitución de Puerto Rico, y cuenta con capacidad para demandar y ser demandado. Se incluye al ELA en el presente pleito en atención a que el DDEC no cuentan con personalidad jurídica separada del ELA. De conformidad con lo dispuesto en la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.4, se diligencia la presente petición por conducto del Secretario del Departamento de Justicia, el licenciado Domingo Emanuelli Hernández.

III. LOS HECHOS

3.1. Tanto la Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico, Ley Núm. 22-2012, según enmendada, 13 LPRA §§ 10851-10855 (en adelante, Ley Núm. 22-2012), como el Código de Incentivos de Puerto Rico, Ley Núm. 60-2019, según enmendada, 13 LPRA §§ 45001-48599 (en adelante, Ley Núm. 60-2019), imponen varios requisitos a los individuos inversionistas que solicitan y obtienen decretos para trasladarse y hacer negocios en Puerto Rico en virtud de esas leyes.

3.2. Entre ellos, el artículo 6 de la Ley Núm. 22-2012 establece la obligación de rendir un informe anual en el cual se someta “evidencia de haber hecho una aportación

anual de por lo menos cinco mil dólares (\$5,000.00) a entidades sin fines de lucro operando en Puerto Rico y debidamente certificadas bajo la [Sección 1101.01 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, según enmendado,] que no sea controlada por la misma persona . . .”. 13 LPRA § 10854.

3.3. Por su parte, la sección 6020.10 de la Ley Núm. 60-2019 establece la obligación de rendir un informe anual acompañado “con evidencia de una aportación anual mínima de diez mil dólares (10,000), que serán destinados a entidades sin fines de lucro operando en Puerto Rico bajo la [Sección 1101.01 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, según enmendado,], que no sea controlada por la misma persona, ni por su descendientes o ascendientes, cónyuges o socios”, de los cuales “cinco mil dólares (\$5,000) estarán destinados a entidades sin fines de lucro que tengan servicios dirigidos a atender la erradicación de la pobreza infantil, que operen en la jurisdicción de Puerto Rico bajo la [misma sección], que no sea controlada por la misma persona, ni por su descendientes o ascendientes, cónyuges o socios, y que se encuentre en la lista que publicará la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario en o antes del 31 de diciembre de cada año de conformidad con las disposiciones de este Código”. 13 LPRA § 48530.

3.4. El 22 de abril de 2024, el periodista Luis J. Valentín Ortiz, del CPI, envió un correo electrónico a la licenciada Miriam W. Sánchez Arroyo; al licenciado Bryan O’Neill, y a la señora Myriam Soto Pagán, oficiales de información del DDEC, con copia a la Sa. Brenda Vázquez Colón, Directora de Prensa del DDEC, mediante el cual solicitó la entrega de la siguiente información, en formato Excel:

1. El nombre de las organizaciones sin fines de lucro que han recibido donativos de beneficiarios de la antigua Ley 22 (ahora Ley 60) en los últimos cinco años y la cantidad de dinero que ha recibido cada una.

Anejo 1.

3.5. Ese mismo día, la Lcda. Sánchez Arroyo respondió al correo electrónico del periodista Valentín Ortiz, acusando recibo de la solicitud e informándole que recibió el número AI2024-06. **Anejo 2.**

3.6. Dos días después, el 24 de abril del 2024, la Sa. Vázquez Colón envió un correo electrónico al periodista Valentín Ortiz anejando la información solicitada para el año 2022. **Anejo 3.**

3.7. El periodista Valentín Ortiz respondió al correo, agradeciendo el envío de la información de 2022 e informando que quedaba pendiente de recibir la información para los años restantes. **Anejo 4.**

3.8. Ante la falta de respuesta a su solicitud, el 27 de mayo de 2024 el periodista Valentín Ortiz envió un correo electrónico a la Sa. Vázquez Colón dando seguimiento a su solicitud. **Anejo 5.**

3.9. Ni la Sa. Vázquez Colón ni algún otro representante del DDEC respondieron a dicho mensaje. **Declaración Jurada de Luis J. Valentín Ortiz.**

3.10. El mismo 27 de mayo de 2024, el periodista Valentín Ortiz envió un correo electrónico a la Sa. Vázquez Colón, con copia a la licenciada Sánchez Arroyo, al licenciado O'Neill y a la Sa. Soto Pagán, mediante el cual solicitó la siguiente información:

1. La base de datos que se realizó para el estudio, "*Performance of Economic Incentives: Data Assessment and Return on Investment (ROI) Analysis*"
2. Un diccionario con los campos de información que tiene la base datos

Anejo 6.

3.11. El referido estudio fue anunciado durante una conferencia de prensa celebrada por el DDEC el 21 de mayo de 2024, en la que participó el periodista Valentín Ortiz, y en la que se anunció la creación de la base de datos solicitada. **Declaración Jurada de Luis J. Valentín Ortiz.** Véase también Comunicado de Prensa, *DDEC publica estudio sobre el retorno de rendimiento de los incentivos*, 22 de mayo de 2024, disponible en <https://www.desarrollo.pr.gov/noticias/ddec-publica-estudio-sobre-el-retorno-de-rendimiento-de-los-incentivos> (última visita el 28 de octubre de 2024).

3.12. En su correo electrónico, el periodista Valentín Ortiz solicitó la entrega de la base de datos en formato de Excel y añadió que, en la medida en la que "hubiera que tachar información personal", se incluyera "un identificador único para cada persona o entidad". **Anejo 6.**

- 3.13. Ningún representante del DDEC respondió a esta nueva solicitud del periodista Valentín Ortiz. **Declaración Jurada de Luis J. Valentín Ortiz.**
- 3.14. Ante la falta de respuesta a ambas solicitudes de información, el 8 de julio de 2024, el periodista Valentín Ortiz, envió, por conducto de su representación legal, una carta de seguimiento a la licenciada Sánchez Arroyo, a la Sa. Vázquez Colón y a la Sa. Soto Pagán, mediante la cual reiteraron y solicitaron la entrega de toda la información pendiente de divulgación en o antes del 22 de julio de 2024. **Anejos 7-8.**
- 3.15. El 10 de julio de 2024, la licenciada Sánchez Arroyo acusó recibo de la comunicación de la representación legal del periodista Valentín Ortiz, e indicó que ambas solicitudes se estarían trabajando bajo el número de la solicitud inicial. **Anejo 9.**
- 3.16. El 17 de julio de 2024, la licenciada Sánchez Arroyo cursó una nueva comunicación a la representación legal del periodista Valentín Ortiz, indicando que, en atención a los días festivos venideros, así como a la “necesidad de identificar toda la información pública, sin menoscabar los derechos de los contribuyentes”, solicitaban un término adicional para entregar la información hasta el 12 de agosto del 2024. **Anejo 10.**
- 3.17. Ese mismo día, la representación legal del periodista Valentín Ortiz respondió a la comunicación de la licenciada Sánchez Arroyo, indicando que, si bien no tenían reparos con el término solicitado en lo relativo a la solicitud de la base de datos, sí lo tenían en cuanto a la lista de organizaciones sin fines de lucro que habían recibido donativos de individuos residentes inversionistas. Dicho reparo estaba cifrado en que la producción casi inmediata de la información para el año 2022 evidenciaba que dicha información era pública y de fácil acceso para el DDEC. **Anejo 11.**
- 3.18. El 23 de julio del 2024, la licenciada Sánchez Arroyo envió una nueva comunicación indicando que el DDEC se encontraba todavía en proceso de recopilar el listado de las donaciones, el cual entregarían en formato digital que tan pronto estuviera listo. **Anejo 12.**

3.19. Ante la reiterada falta de respuesta, incumplimiento con el término previamente solicitado, y ausencia de entrega de información, el 26 de agosto de 2024, la representación legal del periodista Valentín Ortiz cursó una nueva comunicación a la licenciada Sánchez Arroyo y a varios funcionarios del DDEC, mediante la cual concedió un término final a la parte peticionada, venciendo el 30 de agosto de 2024, para entregar la información aún pendiente de divulgación.

Anejo 13.

3.20. Finalmente, el 4 de septiembre de 2024, la licenciada Sánchez Arroyo envió un nuevo mensaje a la representación legal del periodista Valentín Ortiz, al cual anejó la información relativa a los donativos realizados a entidades sin fines de lucro para el año 2021, e informó que aún se encontraban “trabajando con la extracción de la data del 2020, así como con la información del Reporte de Incentivos”. Finalmente, la comunicación indica que se encontraban en espera de que le proveyeran “una fecha estimada para completar el trabajo”. **Anejo 14.**

3.21. Como resultado de lo anterior, al día de hoy, transcurridos más de seis (6) meses desde la presentación de la primera solicitud de información, el DDEC sólo ha entregado la información responsiva a dos (2) de los cinco (5) años solicitados, y, a más de cinco (5) meses de la presentación de la segunda solicitud de información, no ha entregado ninguna información responsiva a la misma. **Declaración Jurada de Luis J. Valentín Ortiz.**

IV. CAUSA DE ACCIÓN

A. Primera causa de acción – Mandamus

4.1. La parte peticionaria acoge, adopta por referencia y hace formar parte de la presente causa de acción todos los hechos alegados en los párrafos anteriores de esta petición.

4.2. El Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil define el auto de *mandamus* como:

[U]n auto altamente privilegiado dictado por el Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado, o por el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y dirigido a alguna persona o personas naturales, a una corporación o a un tribunal judicial de inferior categoría dentro de su jurisdicción requiriéndoles para el cumplimiento de algún acto que en dicho auto se exprese y que esté dentro

de sus atribuciones o deberes. Dicho auto no confiere nueva autoridad y la parte a quien obliga deberá tener la facultad de poder cumplirlo.

32 LPRA § 3421. Véase también Regla 54 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 54; AMPR v. Srio. Educación, 178 DPR 253 (2010); Báez Galib v. CEE II, 152 DPR 382, 391-94 (2000); Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 447-48 (1994).

4.3. Por su parte, el Artículo 650 del mismo cuerpo normativo establece lo siguiente:

El auto de *mandamus* podrá dictarse por el Tribunal Supremo o por el Tribunal de Primera Instancia o por cualquiera de sus magistrados o jueces cuando se hallen en el ejercicio de sus funciones o en sus oficinas, y se dirigirá a cualquier tribunal inferior, corporación, junta o persona obligada al cumplimiento de un acto que la ley particularmente ordene como un deber resultante de un empleo, cargo o función pública; pero aun cuando puede requerir a un tribunal inferior o a cualquiera de sus jueces para que adopte este criterio o para que proceda al desempeño de cualquiera de sus funciones, el auto no puede tener dominio sobre la discreción judicial.

32 LPRA § 3422.

4.4. De conformidad con lo anterior, el recurso solamente procede cuando el peticionario logra demostrar el incumplimiento de un deber ministerial de determinado funcionario público. Noriega, 135 DPR en la pág. 448. Véase también AMPR, 178 DPR en las págs. 263-64; Díaz Saldaña v. Acevedo Vilá, 168 DPR 359, 365 (2006) (Sentencia). Véase además DAVID RIVÉ RIVERA, RECURSOS EXTRAORDINARIOS 107 (2da ed. rev. 1996).

4.5. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, un deber ministerial es “un deber impuesto por la ley que no permite discreción en su ejercicio, sino que es mandatorio o imperativo”. Pagán v. Tower, 35 DPR 1, 3 (1926). Véase también AMPR, 178 DPR en las págs. 263-64; Díaz Saldaña, 168 DPR en la pág. 365; Álvarez de Choudens v. Tribunal Superior, 103 DPR 235, 242 (1974); Rodríguez Carlo v. García Ramírez, 35 DPR 381, 384 (1926). Véase además RIVÉ RIVERA, *supra*, en la pág. 107.

4.6. No obstante, el Tribunal ha señalado que el “deber ministerial, aunque inmanente al auto de *mandamus*, no tiene que ser necesariamente expreso, pues tal supuesto reduciría la función exclusiva de este Tribunal de interpretar la Constitución y las leyes”. AMPR, 178 DPR en la pág. 264 (citando a Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 418 (1982)).

- 4.7. Igualmente, el deber ministerial no tiene que surgir formalmente de una ley, pudiendo este ser imperativo de la Constitución, un reglamento, o cualquier otro documento normativo, abarcando cualquier fuente que tenga fuerza de ley y que obligue al funcionario en cuestión a realizar determinado acto.
- 4.8. Por otra parte, la doctrina impone ciertas limitaciones respecto a la expedición del auto de *mandamus*. De tal manera, éste no puede ser emitido “en los casos en que se encuentre un recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley”. Art. 651, Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA § 3423; Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407 (1982). Es decir, el auto de *mandamus* sólo procede cuando “el derecho a exigir la inmediata ejecución de un acto sea evidente y aparezca que no se podrá dar ninguna excusa para no ejecutarlo”. Regla 54 Proc. Civ., 32 LPRA Ap. V, R. 54.
- 4.9. De igual forma, se ha reconocido que debe existir un requerimiento previo por parte del peticionario hacia el demandado para que éste cumpla con el deber exigido, salvo algunas excepciones. AMPR, 178 DPR en la pág. 267.
- 4.10. Finalmente, el Tribunal Supremo ha establecido que para expedir un recurso de *mandamus* es menester atender si se plantean cuestiones de gran interés público y la controversia levantada requiere una pronta y rápida solución; y si el peticionario tiene un interés especial en el derecho que reclama, distinto al que pueda tener cualquier otro ciudadano. Dávila v. Superintendente Elecciones, 82 DPR 264, 274-75 (1960); Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 DPR 443 (2006).
- 4.11. Por otra parte, el derecho de acceso a la información ha sido reconocido en Puerto Rico como un derecho humano y constitucional de rango fundamental. Kilómetro 0 v. Pesquera López, 207 DPR 200, 207 (2021); Bhatia Gautier v. Rosselló Nevares, 199 DPR 59, 80 (2017); Trans Ad PR v. Junta Subastas, 174 DPR 56, 67 (2008); Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, 170 DPR 582, 590 (2007); Ortiz v. Dir. Adm. Tribunales, 152 DPR 161, 175 (2000); Soto v. Srio. Justicia, 112 DPR 477, 485 (1982).
- 4.12. Dicho derecho emana de los derechos de libertad de expresión, prensa y asociación expresamente dispuestos en la Carta de Derechos de la Constitución

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. CONST. PR, Art. II, § 4. Véase también Kilómetro 0, 207 DPR en la pág. 207; Engineering Services International, Inc. v. AEE, 205 DPR 136, 145 (2020); Bhatia Gautier, 199 DPR en la pág. 80; Trans Ad PR, 174 DPR en la pág. 67; Nieves v. Junta, 160 DPR 97, 102 (2003); Ortiz, 152 DPR en la pág. 175; Soto, 112 DPR en la pág. 485.

4.13. El derecho de acceso a la información pública es también reconocido en varios tratados internacionales como un derecho humano fundamental. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se ha reconocido que:

[E]l derecho de acceso a la información es una herramienta crítica para el control del funcionamiento del Estado y la gestión pública, y para el control de la corrupción. El derecho de acceso a la información es un requisito fundamental para garantizar la transparencia y la buena gestión pública del gobierno y de las restantes autoridades estatales. El pleno ejercicio del derecho de acceso a la información es una garantía indispensable para evitar abusos de los funcionarios públicos, promover la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión estatal y prevenir la corrupción y el autoritarismo. De otra parte, el libre acceso a la información es un medio para que, en un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía pueda ejercer adecuadamente sus derechos políticos. Ciertamente, los derechos políticos tienen como presupuesto la existencia de un debate amplio y vigoroso para el cual es indispensable contar con la información pública que permita evaluar con seriedad los avances y las dificultades de los logros de las distintas autoridades. Sólo a través del acceso a la información bajo el control del Estado es posible que los ciudadanos puedan saber si se está dando cumplimiento adecuado a las funciones públicas. Finalmente, el acceso a la información tiene una función instrumental esencial. Solamente a través de una adecuada implementación de este derecho las personas pueden saber con exactitud cuáles son sus derechos y qué mecanismos existen para protegerlos. En particular, la implementación adecuada del derecho de acceso a la información, en todas sus dimensiones, es condición esencial para la realización de los derechos sociales de los sectores excluidos o marginados. En efecto, estos sectores no suelen tener formas alternativas sistemáticas y seguras para conocer el alcance de los derechos que el Estado ha reconocido y los mecanismos para exigirlos y hacerlos efectivos.

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL MARCO JURÍDICO INTERAMERICANO 2-3 (2da ed. 2012) (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión), disponible en <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%202012%202da%20edicion.pdf> (última visita el 28 de octubre de 2024).

4.14. Así, en Claude Reyes y otros v. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 19 de septiembre de 2006, Serie C No. 151 (Corte Interamericana de Derechos Humanos), enfrentado a una reclamación incoada por un grupo de personas y organizaciones no gubernamentales contra el Gobierno de Chile, ante su negativa de brindarles toda la información que requerían del Comité de Inversiones

Extranjeras en relación con un proyecto de deforestación que se llevaría a cabo en la Decimosegunda Región de Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló lo siguiente:

84. Este Tribunal ha expresado que “[l]a democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte”, y constituye “un ‘principio’ reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano”. La Asamblea General de la OEA en diversas resoluciones consideró que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, una mayor transparencia y una buena gestión pública, y que en un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales, a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información.

85. La Corte Interamericana ha hecho referencia a la estrecha relación existente entre democracia y libertad de expresión, al establecer que

[...] la libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también *conditio sine qua non* para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.

86. En este sentido, el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso.

87. El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad.

Id. en los ¶¶ 84-87.

4.15. Tanto la Declaración Americana en su art. IV (“Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”), como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 19 (“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”), generan obligaciones para Estados Unidos y sus territorios, exigiendo que la gestión estatal del gobierno de Puerto Rico se rija por “los principios de máxima divulgación y buena fe”. EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL MARCO JURÍDICO INTERAMERICANO, *supra*.

4.16. De igual forma, los principios 2 al 4 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la CIDH, reconocen la naturaleza fundamental del derecho de acceso a la información, e imponen a los Estados y sus territorios una obligación de máxima divulgación, que “sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”. *Principios sobre Libertad de Expresión*, <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosLE.asp> (última visita el 28 de octubre de 2024).

4.17. El derecho de acceso a la información también encuentra su justificación en los supuestos básicos de la vida en sociedades democráticas. Colón Cabrera, 170 DPR en la pág. 590 (“[E]l acceso a la información constituye un componente importante de una sociedad democrática, en donde el ciudadano puede emitir un juicio informado sobre las actuaciones del Gobierno”); Bhatia Gautier, 199 DPR en la pág. 80 (“El acceso a la información pública constituye un pilar fundamental en toda sociedad democrática”); Engineering Services International, 205 DPR en la pág. 145.

4.18. Ello se debe a que, “en una sociedad democrática, ‘resulta imperativo reconocer al ciudadano común el derecho legal de examinar e investigar cómo se conducen sus asuntos’”. Kilómetro 0, 207 DPR en las págs. 207-208 (citando a Ortiz, 152 DPR en la pág. 175).

4.19. Después de todo, “[s]in conocimiento de hechos no se puede juzgar; tampoco se puede exigir remedios a los agravios gubernamentales mediante los procedimientos judiciales o a través del proceso de las urnas cada cuatro (4) años”.

Soto, 112 DPR en la pág. 485. Véase también Bhatia Gautier, 199 DPR en las págs. 80-81.

4.20. Además, el derecho de acceso a la información “es un catalizador indispensable de la participación ciudadana”. Engineering Services International, 205 DPR en la pág. 146. Véase también Trans Ad PR, 174 DPR en la pág. 70.

4.21. Visto de esta manera, el derecho al acceso a la información sirve de garante de todo régimen que aspira a ser democrático. En palabras del profesor Efrén Rivera Ramos:

Cualquiera que sea la definición que adscribamos al concepto “democracia”, su principio cardinal es que el poder político ha de residir en el pueblo y que los gobernantes ejercen sus funciones para el pueblo y por mandato de éste. Mal podría gobernarse a sí mismo un pueblo que estuviere ajeno a cuanto sucede en la conducción de sus asuntos.

Efrén Rivera Ramos, *La libertad de información: Necesidad de su reglamentación en Puerto Rico*, 44 REV. JUR. UPR 67, 69 (1975). Véase también Luis F. Estrella Martínez, *La libertad de información como elemento necesario para el Acceso a la Justicia*, 55 REV. DER. PR 23 (2016); Carlos Ramos Hernández, *Acceso a la información, transparencia y participación política*, 85 REV. JUR. UPR 1015 (2016).

4.22. Dada la importancia de este derecho, “[e]l Estado . . . no puede negar caprichosamente y sin justificación aparente la información recopilada en su gestión pública”. Soto, 112 DPR en la pág. 489; Colón Cabrera, 170 DPR en la pág. 590; Santiago v. Bobb y El Mundo, 117 DPR 153, 158 (1986).

4.23. Ello se debe a que “al recibir del Pueblo soberano la función de gobernar, el Estado no quedó en libertad de decidir cuáles papeles y documentos resultantes de su gestión pública estarían fuera del escrutinio de quienes son, en esencia, la fuente misma de la soberanía”. Soto, 112 DPR en la pág. 489.

4.24. Así, “[h]oy día la secretividad en los asuntos públicos es excepción y no norma”. Kilómetro 0, 207 DPR en la pág. 208 (citando a Santiago, 117 DPR en la pág. 159).

4.25. Además, en la tarea de garantizar este derecho, “la prensa constituye ‘un vehículo de información y opinión [para] informar y educar al público, ofrecer críticas, proveer un foro para la discusión y el debate, y actuar como sustituto para obtener noticias e información para sus lectores, que por sí y como individuos no pueden o desean recopilarla’”. Santiago, 117 DPR en la pág. 159.

4.26. Por otra parte, el derecho al acceso a la información, en su modalidad de acceso a documentos, encuentra reconocimiento estatutario en el Artículo 409 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA § 1781, el cual establece, que “[t]odo ciudadano tiene derecho a inspeccionar y sacar copia de cualquier documento público de Puerto Rico, salvo lo expresamente dispuesto en contrario por la ley”. *Id.*

4.27. Igualmente, la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, Ley Núm. 141-2019, 3 LPRA §§ 9911-9923, establece como política pública, lo siguiente:

1. La información y documentación que produce el gobierno se presume pública y accesible a todas las personas por igual.
2. La información y documentación que produce el gobierno en sus estudios, transacciones y en el ejercicio de la autoridad pública, de manera directa o delegada, son patrimonio y memoria del pueblo de Puerto Rico.
3. El derecho constitucional de acceso a la información requiere la transparencia gubernamental.
4. Toda información o documento que se origine, conserve o reciba en cualquier dependencia del Gobierno, aunque se encuentre bajo la custodia de un tercero, se presume público y debe estar accesible al Pueblo y la prensa.
5. El derecho de acceso a la información pública es un pilar constitucional y un derecho humano fundamental.
6. El acceso a la documentación e información pública tiene que ser ágil, económico y expedito.
7. Toda persona tiene derecho a obtener la información y documentación pública, sujeto a las normas y excepciones aplicables.
8. El Gobierno de Puerto Rico establece en la presente Ley una política de apertura a la información y documentación, que incluya la disponibilidad de la tecnología y de los avances necesarios para hacer valer el derecho de los solicitantes a acceder a la información y documentación pública de forma oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles, inalterados e íntegros.

Art. 3, Ley Núm. 141-2019, 3 LPRA § 9913.

4.28. A su vez, la frase ‘documento público’ es definido en la Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico como

[T]odo documento que se origine, conserve o reciba en cualquier dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con la ley o en relación con el manejo de los asuntos públicos y que de conformidad con lo dispuesto en la sec. 1002 de este título se haga conservar [o] que se requiera conservar permanentemente o temporalmente como prueba de las transacciones o por su valor legal. Incluye aquellos producidos de forma electrónica que cumplan con los requisitos establecidos por las leyes y reglamentos.

3 LPRA § 1001.

- 4.29. De igual forma, el inciso (a) del citado artículo dispone que un ‘documento’ incluye, pero no se limita a, “todo papel, libro, folleto, fotografía, película, microforma, cinta magnetofónica, mapa, dibujo, plano, cinta magnética, disco, video cinta o cualquier otro material leído por máquina y cualquier otro material informativo sin importar su forma o características físicas”. *Id.*
- 4.30. Visto de esta manera, el que la información solicitada no conste en un documento impreso, aunque sí sea accesible de forma electrónica, no impide que sea clasificada como información pública o que pueda ser divulgada a petición de cualquier persona. Véase Centro de Periodismo Investigativo v. García Padilla, et al., KLAN 2015-01585 (Sentencia del Tribunal de Apelaciones del 11 de abril de 2016) (“Las múltiples formas en las que hoy día se genera, recibe e incluso se almacena o conversa información, y que no se limita . . . a información recogida en un formato de papel, no puede impedir, como norma general, que la información de carácter pública pueda ser divulgada . . .”).
- 4.31. En virtud de lo anterior, “[u]na vez un documento es catalogado como público, todo ciudadano y ciudadana, por el hecho de serlo, tiene legitimación activa para solicitar y acceder a información pública”. Engineering Services International, 205 DPR en la pág. 147. Véase también Kilómetro 0, 207 DPR en la pág. 209.
- 4.32. De igual forma, procede también la divulgación de información pública, aun cuando esta se encuentre bajo la custodia de un tercero. Art. 3, Ley Núm. 141-2019, 3 LPRA § 9913 (“Toda información o documento que se origine, conserve o reciba en cualquier dependencia del Gobierno, aunque se encuentre bajo la custodia de un tercero, se presume público y debe estar accesible al Pueblo y la prensa”). Véase además Centro de Periodismo Investigativo v. García Padilla, et al., KLAN 2015-01585 (Sentencia del Tribunal de Apelaciones del 11 de abril de 2016) (resolviendo que la información sobre las entidades que adquirieron bonos de obligación general durante la emisión realizada en marzo de 2014 era pública, aun cuando estuviera en manos de la compañía privada suscriptora de los bonos).
- 4.33. Además, el Tribunal Supremo ha señalado que, “la alegada onerosidad de reproducir documentación no es fundamento suficiente para coartar el derecho de

acceso a la información pública y los principios de transparencia y participación ciudadana” que obligan al Estado. Engineering Services International, 205 DPR en la pág. 162.

4.34. Ahora bien, pese a la naturaleza fundamental del derecho al acceso a la información, el mismo no es un derecho absoluto, “sino que pueden existir intereses apremiantes del estado que justifiquen un reclamo de confidencialidad de su parte”. Trans Ad de PR, 174 DPR en la pág. 68; Soto, 112 DPR en la pág. 493. Véase también Bhatia Gautier, 199 DPR en la pág. 82.

4.35. Así, cuando el Estado interesa invocar la confidencialidad de documentos o información pública, debe probar **de forma precisa e inequívoca** la aplicabilidad de alguna de las siguientes excepciones:

(1) que una ley así lo declara; (2) que la comunicación está protegida por algún privilegio evidenciario; (3) que la divulgación de la información puede lesionar derechos fundamentales de terceros; (4) se trate de un confidente, según la Regla 515 de Evidencia de 2009, o (5) que sea información oficial conforme a la Regla 514 de Evidencia de 2009.

Kilómetro 0, 207 DPR en la pág. 210 (énfasis suplido). Véase también Engineering Services International, 205 DPR en la pág. 148; Bhatia Gautier, 199 DPR en la pág. 83; Trans Ad PR, 174 DPR en la pág. 68; Colón Cabrera, 170 DPR en la pág. 590; Santiago, 117 DPR en la pág. 159.

4.36. En estos casos, el Estado “tiene la carga de probar que satisface cualquiera de las excepciones antes enumeradas”, Kilómetro 0, 207 DPR en la pág. 210; Engineering Services International, 205 DPR en la pág. 148; Bhatia Gautier, 199 DPR en la pág. 83; Colón Cabrera, 170 DPR en la pág. 590; Santiago, 117 DPR en la pág. 159, por lo que no puede descansar en “meras generalizaciones” para invocar exitosamente alguna de estas excepciones. Kilómetro 0, 207 DPR en la pág. 210; Engineering Services International, 205 DPR en la pág. 149; Santiago, 117 DPR en la pág. 159.

4.37. Por consiguiente, es deber del Estado dar una “explicación detallada” de la excepción invocada, Bathia Gautier, 199 DPR en la pág. 91, que permita acreditar su validez, y los tribunales deben examinar estos reclamos con suma cautela. Santiago, 117 DPR en la pág. 159 (Los tribunales deben ser “cautelosos en conceder livianamente cualquier pedido de confidencialidad del Estado”). Véase también Kilómetro 0, 207 DPR en la pág. 210.

4.38. Por último, la mera invocación de una ley como fundamento para restringir el acceso a la información no es suficiente para avalar la existencia de una de las excepciones a dicho derecho. Del texto de la ley debe surgir la clara intención del legislador de mantener ciertos documentos bajo el palio de la confidencialidad. Colón Cabrera, 170 DPR en la pág. 592 (“[N]o podemos menos que exigirle a la Asamblea Legislativa una orden clara y terminante.”).

4.39. De igual manera, al examinar el texto de la ley invocada, ésta “debe ser interpretada restrictivamente a favor del acceso [a la información]”. *Id.* Además,

[T]oda ley que pretenda ocultar información a un ciudadano bajo el palio de la confidencialidad tiene que justificarse a plenitud. Ello se satisface si la legislación: (1) cae dentro del poder constitucional del Gobierno; (2) propulsa un interés gubernamental importante o sustancial; (3) el interés gubernamental no está relacionado con la supresión de la libre expresión, y (4) la restricción concomitante del derecho a la libre expresión no es mayor que la esencial para propulsar dicho interés.

Colón Cabrera, 170 DPR en las págs. 592-93.

4.40. En sus expresiones más recientes sobre este tema, el Tribunal Supremo ha aclarado que “las restricciones impuestas por el aparato gubernamental [al acceso a la información] deben responder a un interés apremiante del Estado”, y no meramente a un interés importante o sustancial. Bhatia Gautier, 199 DPR en la pág. 82. Véase también Kilómetro 0, 207 DPR en la pág. 210 (expresando que “aquellas restricciones que el Estado impone en el acceso a la información deben satisfacer los criterios de un escrutinio estricto”); Engineering Services International, 205 DPR en la pág. 148 (igual que Kilómetro 0).

4.41. Por último, en aquellos casos en los que el Estado logre invocar exitosamente algún reclamo de confidencialidad, procede entonces determinar si el interés público en divulgar la información excede el reclamo de confidencialidad. Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, 130 DPR 919, 938 (1992) (“Para que el Estado prevalezca, éste debe presentar prueba y demostrar la existencia de intereses apremiantes de mayor jerarquía que los valores protegidos por este derecho de libertad de información de los ciudadanos. Nuestra función judicial es ‘resolver si determinada información está cubierta por el manto de secretividad y, de estarlo,

si ello es compatible con el ejercicio de derechos constitucionales protegidos”.)
(citando a Soto, 112 DPR en la pág. 498).

4.42. Además, aún en casos en los que se avale un reclamo de confidencialidad por parte del Estado, debe hacerse un esfuerzo por proveer toda la información pública no comprendida dentro de dicho reclamo, incluida la posibilidad de segregar o tachar aquellas partes confidenciales de documentos o expedientes públicos. Colón Cabrera, 170 DPR en las págs. 596-97. Véase también Kilómetro 0, 207 DPR en las págs. 221-22.

4.43. En el presente caso, las solicitudes de información cursadas a la parte peticionada cumplen con los requisitos de forma y contenido establecidos en el artículo 6 de la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, Ley Núm. 141-2019, 3 LPRA § 9916.

4.44. La parte contra la cual se dirige el presente recurso tiene el deber ministerial de entregar la información solicitada.

4.45. La información solicitada es recibida y conservada por la parte peticionada. Por lo tanto, es información pública, a la cual cualquier persona puede tener acceso u obtener una copia si así lo solicita.

4.46. Toda la información solicitada es información pública y de alto interés público para el Pueblo de Puerto Rico.

4.47. La información solicitada no está protegida de forma alguna por alguna ley, reglamento, privilegio o reclamo de confidencialidad y tampoco está cobijada bajo alguna de las excepciones al derecho de acceso a la información.

4.48. La parte peticionaria ha agotado todos los remedios administrativos disponibles para obtener la información solicitada sin obtener resultados positivos, y ha cumplido con el deber de hacer un requerimiento previo a la parte peticionada.

4.49. No existe otro remedio adecuado y eficaz en ley para que la parte peticionaria pueda obtener la información solicitada, por lo que es necesario que se expida el presente recurso para la obtención de dicha información.

4.50. La negativa de la parte peticionada a proveer la información pública solicitada lacera el derecho constitucional de acceso a la información de la parte peticionaria.

4.52. Los derechos invocados por la parte peticionaria en el presente recurso surgen exclusivamente al amparo de la Constitución y las leyes de Puerto Rico.

4.53. En este caso procede declarar con lugar la petición de *mandamus* a tenor con la normativa prevaleciente, en vista de lo cual procede que se ordene a la parte peticionada a proveer la información que ha sido solicitada.

V. SÚPLICA

EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, se solicita a este Tribunal que tome conocimiento de lo antes expuesto, declare **HA LUGAR** la presente petición y, en consecuencia, ordene a la parte peticionada a cumplir inmediatamente con su deber ministerial de entregar, libre de costo, la siguiente información:

1. El nombre de las organizaciones sin fines de lucro que han recibido donativos de beneficiarios de la antigua Ley Núm. 22-2012 (ahora Ley Núm. 60-2019) en los años 2019, 2020 y 2023 y la cantidad de dinero que ha recibido cada una.
2. La base de datos que se realizó para el estudio, "*Performance of Economic Incentives: Data Assessment and Return on Investment (ROI) Analysis*".
3. Un diccionario con los campos de información que tiene la base datos.

Además, se solicita al Tribunal que ordene a la parte peticionada a proceder con la divulgación prospectiva de esta información a la parte peticionaria cuando le sea solicitada, en los mismos términos en los que le sea ordenado divulgar, y en cumplimiento con el Artículo 4 de la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, Ley Núm. 141-2019, 3 LPRA § 9914, y con la normativa constitucional sobre acceso a la información en nuestra jurisdicción.

SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2024.

(f) Luis José Torres Asencio

Colegiado Núm. 17087
 TS Núm. 15610
 Clínica de Asistencia Legal
 Facultad de Derecho UIPR
 PO Box 368038
 San Juan, PR 00936-8038
 Tel. (787) 209-6375; Fax: N/A
 C/E: ltorres@juris.inter.edu

(f) Judith W. Berkan Barnett

Colegiada Núm. 8054; TS Núm. 6723
 Clínica de Asistencia Legal
 Facultad de Derecho UIPR
 O'Neill G-11, San Juan, PR 00918-2301
 Tels. 787-399-7657; 787-764-0814
 C/E: berkanj@microjuris.com; berkanmendez@gmail.com

(f) Steven P. Lausell Recurt

Colegiado Núm. 17958
 TS Núm. 16644
 Clínica de Asistencia Legal
 Facultad de Derecho UIPR
 PO Box 194735
 San Juan, PR 00919-4735
 T. 787-751-1600; F. 787-751-1867
 C/E: steven.lausell@juris.inter.edu

(f) Gabriela Rolón Ojeda

C/E: gabriela.rolon@lex.inter.edu
 Estudiante asignada al caso

Se presenta libre de derechos por la parte peticionaria estar representada por el Proyecto de Acceso a la Información de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 4 LPRA § 303a.